

ESPAÑA ANTE LA CULMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA AL COMENZAR EL SIGLO XXI: LOS CASOS DE BULGARIA, RUMANIA, CROACIA Y TURQUÍA. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA¹

Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ
Universidad de Valladolid e IEE

1. Introducción

Una vez consumada la primera fase de la denominada «ampliación al Este» con la incorporación a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia (además de Malta y Chipre), en menos de tres años se debería producir la segunda fase de dicha ampliación con la incorporación el 1 de enero de 2007 de Bulgaria y Rumania. Pero el proceso de ampliación de la Unión Europea sigue su curso en el siglo veintiuno: así, y teniendo en cuenta la normalización conseguida en el ámbito Balcánico, el Consejo Europeo de junio de 2004 concedió a Croacia la condición de país candidato a la integración, y en octubre de 2005 comenzaron las negociaciones para la integración de Turquía (país candidato a la adhesión desde 1999) y también de Croacia.

España, por su parte, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea, tiene especiales intereses que defender en relación con la futura integración de estos países de la Europa Suroriental y Balcánica, además de Turquía (como ya ocurrió durante las negociaciones que condujeron a la gran ampliación del 1 de mayo de 2004). En este sentido, podemos afirmar que algunos de estos países son potencialmente competidores a la vez que complementarios en el proceso común de la construcción de la nueva Europa unida del siglo veintiuno dentro de la nueva realidad mundial que se consolidará en las primeras décadas de la nueva centuria. Aspectos tan fundamentales en la viabilidad del proyecto de la Unión Europea como la asignación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea desempeñan un papel fundamental en la toma de posición de las diferentes opiniones públicas ante este nuevo proceso de ampliación en marcha.

2. El caso de Bulgaria

1. Los años vividos bajo el «socialismo real»

Al tiempo que las primeras unidades del Ejército Rojo pisaban suelo búlgaro, el 9 de septiembre de 1944 el pueblo se levantaba en armas contra el enemigo co-

¹ De los cuatro países tratados en este monográfico, se omite la introducción histórica de Rumania ya presentada por los autores en el n° 32 de esta misma revista.

mún alemán; pocos días más tarde, el 15 de septiembre, las fuerzas armadas soviéticas entraban en Sofía. Con el país bajo control, el «Frente de la Patria» —el cual venía actuando en Bulgaria con apoyo soviético desde 1942— formaba un nuevo gobierno compuesto por comunistas, agrarios, la agrupación *Zveno*, socialdemócratas e independientes. Como ocurrió en los demás países de la zona, las carteras clave del ejecutivo (Interior y Justicia) fueron a parar a manos de los comunistas, los cuales iniciaron rápidamente los pertinentes procesos sumarísimos para la depuración de los personajes más influyentes de la vida pública por «filofascistas» y «colaboracionistas».

Esta gran primera acción contra el «enemigo interior» emprendida por los ministros comunistas alcanzó su momento culminante en mayo de 1945 y terminó con la unidad en el seno de la coalición frentepopulista, muy contestada por sectores socialdemócratas y de la Unión Agraria (cuyo líder, G.M. Dimitrov, tuvo que exiliarse en 1945 al ser acusado de «agente occidental»). El nacimiento de esta oposición no arredró a los comunistas ni a los grupos cercanos, cuyo objetivo primordial era obtener el triunfo en las siguientes elecciones generales. Ante el ambiente político tan viciado como se respiraba en el país, el nuevo líder del partido agrario, Nikolai Petkov, solicitó urgentemente a la Comisión de Control interaliada el estudio de la llamada «cuestión búlgara» —rogando a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña especial atención a la misma— con el propósito de que entre todos detuvieran la convocatoria de elecciones generales ante todo el cúmulo de irregularidades observadas en el proceso. Pero, finalmente, el gobierno, con el apoyo de los soviéticos, anunciaba la convocatoria definitiva de las votaciones para el 17 de noviembre de 1945. Ante tal decisión, agrarios, socialdemócratas y demócratas optaron por retirarse del proceso electoral; mientras que los comunistas, por su parte, con la dirección de su líder histórico, G. Dimitrov (que el 8 de noviembre había regresado al país), redoblaron esfuerzos para hacerse con el control de la voluntad popular ante el abandono de sus rivales.

El día anunciado tuvo lugar la celebración de las elecciones «ficticias» que contaron con una gran participación popular —el 85 por ciento del censo— ante las medidas coercitivas anunciadas por el gobierno contra los posibles abstencionistas, los cuales podían incurrir incluso en el delito de «lesa Patria». Según los resultados oficiales, la victoria correspondió al Frente de la Patria —capitaneado por el Partido Comunista— con casi el 90 por ciento de los sufragios. Ante las protestas de los occidentales, que cuestionaban la validez de los comicios, las autoridades aceptaron «repetirlas» un año más tarde.

La Asamblea Nacional, salida de las pseudoelecciones del 17 noviembre de 1945, celebró su primera sesión el 16 de diciembre. A partir de este instante, el dominio de los comunistas fue incontestable. El 8 de septiembre de 1946, el pueblo de Bulgaria aprobaba en referéndum, con el 92 por ciento de los votos, la nueva forma de Estado: el 15 de septiembre Bulgaria pasaba a convertirse oficialmente en «República Popular».

Dentro del marco legal vigente, y después de una campaña electoral especialmente violenta (ne la que murieron más de una veintena de militantes del partido

agrario), el 27 de octubre de 1946 volvieron a celebrarse unas elecciones generales tan criticadas como las anteriores. El triunfo recayó otra vez del lado de los partidos del Frente con el 80 por ciento de los votos y 374 escaños (de un total de 475), de los cuales 277 (el 55 por ciento de los sufragios) correspondían al Partido Comunista, que ya era la fuerza política más importante del país. En virtud de lo anterior, G. Dimitrov era nombrado presidente del nuevo gobierno formado el 23 de noviembre. Para terminar con todo conato de oposición, en el verano de 1947, las autoridades lanzaron una campaña de depuración a gran escala cuyo gran objetivo fue la Unión Agraria: este partido fue disuelto y su líder, Petkov, detenido, condenado a muerte y ejecutado el 16 de agosto. La eliminación de agrupaciones y líderes políticos no se limitó exclusivamente a los partidos considerados de derecha, sino también a los de izquierda como el socialdemócrata: el sector extremista de este partido terminó unificándose con el comunista (11 de agosto de 1948), reconocido ahora como la única fuerza dirigente del país.

En cuanto a las transformaciones socioeconómicas que tuvieron lugar en estos años en Bulgaria, sobresalió la legislación de diciembre de 1947 (que completó la de agosto de 1945) sobre nacionalizaciones de empresas industriales, mineras, bancarias y de comunicaciones, según la cual el 93 por ciento del potencial productivo del país pasó a manos del Estado. Una vez consumado el cambio de las estructuras económicas, el V Congreso del Partido Comunista, celebrado del 18 al 25 de diciembre de 1948, dio el visto bueno a la planificación centralizada de la economía —con la puesta en marcha del primer plan quinquenal— fundamentada en la industrialización acelerada y en la colectivización total de la agricultura.

El 2 de julio de 1949 fallecía en Moscú el histórico dirigente del internacionalismo proletario y hombre fuerte de Bulgaria, George Dimitrov. La sucesión en las altas magistraturas no fue tan traumática: Vulko Chervenkov pasó a ser el nuevo Secretario General del Partido y, en enero de 1950, a la muerte del Primer Ministro, Kolazov, ocupó también el puesto vacante. Una vez asentado en el poder, Chervenkov continuó con las purgas iniciadas en 1948 contra los «desviacionistas» y, en general, contra todos los comunistas contrarios a aplicar en Bulgaria las medidas de tipo soviético. En el Congreso del Partido celebrado en marzo de 1951, Chervenkov afirmó que unos 50.000 militantes de la organización habían sido depurados desde 1948, dándose por terminada así la etapa de regeneración dentro de las filas comunistas. A instancias de Moscú, el Comité Central fue también renovado e incluso Chervenkov hubo de abandonar en beneficio de Todor Jivkov la Secretaría General del Partido, aunque mantuvo el poder ejecutivo del Estado. Pero dentro del proceso de desestalinización llevado a cabo en todo el ámbito soviético, el VIII Congreso del Partido reunido en noviembre de 1962 otorgó todo el poder a Jivkov. La renovación profunda en los órganos de dirección contó con el apoyo de la Unión Soviética y el propio Kruschov legitimó el cambio alentando la política de Jivkov.

Hasta 1958 el objetivo primordial del régimen fue dar el salto definitivo de las formas capitalistas a la socialización y obtener los recursos necesarios para crear una infraestructura industrial potente en un país donde la inmensa mayoría de la población trabajaba en el sector primario. Era obligado, por tanto, partir de una

transformación radical de la agricultura para colectivizar su propiedad y explotación, modernizar esta última y posibilitar el traslado de la mano de obra restante a las industrias que debían ponerse en funcionamiento. La oposición de una parte del campesinado a abandonar su sistema tradicional de trabajar la tierra, por un lado, y al proceso de socialización rápido, por otro, se manifestó pronto. La productividad del agro no crecía al ritmo deseado por las autoridades y la vía colectivizadora se abría con muchas imperfecciones. En cualquier caso, la política general al respecto no sufrió variaciones espectaculares. El primer paso fue fomentar desde el aparato estatal la implantación de granjas en régimen cooperativo para incorporar a las tareas comunes a multitud de pequeños campesinos. Así, entre 1948 y 1958 unos doce millones de parcelas y más de un millón de agricultores quedaron reagrupados en 3.290 cooperativas. La planificación industrial centró su punto de mira en el desarrollo extensivo de la industria pesada, con lo que logró avances importantes en maquinaria agrícola, textiles o transformación alimentaria, sectores en los cuales trabajaba una mano de obra en constante aumento que iba rompiendo poco a poco el panorama secular de una Bulgaria volcada a la producción primaria. Estos procesos fueron estrictamente reglamentados y controlados desde el poder central, lo que impidió el surgimiento de movimientos de protesta importantes.

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, dos cuestiones fueron las más relevantes en la evolución búlgara, si bien ninguna de ellas introdujo variaciones sustanciales en el panorama general. Una política económica menos ortodoxa en la aplicación inflexible de los Planes y en la centralización del control sobre los sectores productivos pareció entreverse desde 1966, y fue claramente explícita al año siguiente cuando Jivkov criticó la injerencia excesiva del partido en la marcha de la economía. En 1968 las autoridades aprobaban el «Nuevo Régimen de Gestión», cuya virtualidad era otorgar a los centros de producción mayor libertad en la toma de decisiones, modernizar el aparato productivo y aumentar la productividad y competencia de la industria nacional. El proyecto, a pesar de la coincidencia en el tiempo con el «Nuevo Mecanismo Económico» húngaro y de sus afanes reformistas, no introdujo finalmente planteamientos ni mecanismos innovadores: la rigidez planificadora y el principio centralizador continuaron desempeñando el mismo papel fundamental de años anteriores.

El otro hecho de interés fue la aprobación de una nueva constitución. El borrador se presentó el 30 de marzo de 1971 y el 18 de mayo era aprobada en referéndum nacional, para entrar en vigor días después. El texto era necesario una vez que, según el gobierno y el Partido, los fundamentos socialistas de la sociedad y la economía búlgaras estaban firmemente asentados. El proceso industrializador había acabado con la vinculación tradicional de la población al agro (en la inmediata posguerra los campesinos representaban las tres cuartas partes de los habitantes y a comienzos de la década de los setenta, con una población total de 8,5 millones, tan sólo suponían el 25 por ciento). Por otro lado, las diferencias de clase habían sido barridas.

La consecuencia de estas transformaciones aparecía reflejada en la definición de Bulgaria como «República Popular en un estado socialista de los trabajadores»,

superación de la que se daba en 1947: «Bulgaria es una República Popular con un gobierno representativo». El texto fundamental recogía la hegemonía del Partido Comunista en la vida del país, reconocía la propiedad colectiva de los medios de producción y afirmaba el «deber de desarrollar e intensificar la amistad con la URSS y con los demás países socialistas».

Pero si el desarrollo industrial no alcanzaba las previsiones gubernamentales, la evolución de la agricultura tampoco respondía a los planes realizados y los problemas comenzaron a salir a la luz. Así, el empeoramiento de la situación económica tuvo su corolario en el nacimiento de una contestación al régimen después de que se publicara en Viena la denominada «Declaración 1978», texto redactado por grupos opositores que solicitaban un relajamiento del control del Partido sobre la vida búlgara y una democratización progresiva del sistema político.

Los pilares que sostenían a la «decimosexta república soviética», como era conocida en algunos círculos por su fidelidad al poder soviético, empezaban a resquebrajarse. En 1985, la producción industrial cayó y las cosechas fueron desastrosas. Los problemas de avituallamiento de la población continuaron y la calefacción y la electricidad debieron de racionarse, a pesar de lo cual se duplicó la deuda externa. La llegada de Gorbachov a la Secretaría General del PCUS y su programa de reformas fueron recibidos con el acatamiento de siempre entre los mandatarios búlgaros, que se prepararon para llevar a cabo su propia *perestroika*. Ya desde 1982 Gricha Filipov, Primer ministro, había abogado por un cambio profundo del sistema económico (reduciendo el peso de la administración, despidiendo mano de obra innecesaria, estableciendo jornales según los resultados de los centros de producción, etc.), pero fue en julio de 1987 cuando el Comité Central del Partido aseguró que había tomado «conciencia del hecho de que el modelo de edificación del socialismo seguido en Bulgaria hasta el presente estaba agotado. No se trataba ya del perfeccionamiento del sistema, sino de su transformación profunda». El propio Comité establecía la separación de los cometidos del Partido y del Estado, suprimía una serie de ministerios e introducía transformaciones en el sistema planificador que afectaban también a la reforma de las empresas, a la vez que se terminaba con los complejos agroindustriales, pieza clave del régimen. Jivkov pretendía ser también el hombre del cambio en Bulgaria, pero se apoyaba para ello en la vieja guardia del Partido, que continuaba pese a todo su papel hegemónico, pues, según Jivkov, el sistema comunista en sí podía regenerarse. El efecto de la apertura controlada fue la generalización de las protestas y el surgimiento de grupos de oposición organizada. Desde el otoño de 1987 el régimen de Jivkov entraba en su etapa final.

2. Crisis, transición y «retorno de Europa»

Sin lugar a dudas el deterioro de la economía búlgara, perceptible en la década de los años ochenta por la caída de la producción y la productividad en la industria y la agricultura o en el crecimiento de la deuda, a la vez que facilitó el recambio en la cúpula del Estado, también estuvo en el origen del nacimiento de una primera oposición al sistema comunista. Desde 1988 venían funcionando diversas agrupaciones de carácter contestatario con muy diversos objetivos, por ejemplo, la defensa

de los derechos humanos o el impulso de las reformas de tipo soviético (*perestroika* y *glasnost*); un año más tarde surgían otras como el sindicato *Podkrepa* («Apoyo») organización profesional de intelectuales, el «Comité para la Defensa de la Religión», el grupo ecologista «Ecoglasnost», dado a conocer durante las jornadas de la Conferencia Ecológica de la CSCE celebradas en Sofía a finales de octubre y principios de noviembre, o la «Unión de Fuerzas Democráticas», fundada el 7 de diciembre de 1989 como lugar de encuentro de los principales grupos de oposición.

Ante la evolución de los acontecimientos, el 10 de noviembre de 1989, momentos antes de la celebración de un pleno del Comité Central, los miembros reformistas de la *nomenklatura* —contando con la aquiescencia del Kremlin— obligaron a Jivkov a presentar su renuncia a todos los cargos en el Partido y en el Estado, lo que fue aceptado de inmediato por el *Politburo*. Posteriormente, Jivkov fue arrestado y, dada su avanzada edad, recluido en un hospital. A partir de este momento, el hombre fuerte del Partido pasaba a ser el reformista Petar Mladenov, ministro de Asuntos Exteriores, convertido en el nuevo Secretario General.

Gracias al empuje de la sociedad civil reflejado en diversas manifestaciones desde mediados de noviembre culminadas, el 10 de diciembre de 1989, con una gran concentración en Sofía para reclamar el fin del sistema de socialismo real, el proyecto de transformación pausada ideado por los comunistas reformistas debía retocarse para dar paso a un cambio mucho más radical de la estructuras políticas, económicas y sociales. En este orden de cosas, las autoridades, inmersas en un proceso de negociación global con la oposición, procedieron a cambiar el Código penal, prometieron respetar los derechos humanos empezando por el de la minoría turca, dejando sin efecto todo intento de asimilación forzosa o «bulgarización» de esta minoría, que en mayo de 1989 produjo graves disturbios reprimidos sin contemplaciones por la policía; concedieron una amnistía para los delitos políticos y abjuraron del principio del papel dirigente de la sociedad otorgado al Partido Comunista. Al mismo tiempo, anunciaron la celebración de elecciones libres y pluralistas a mediados de 1990, pieza esencial en la construcción del Estado de Derecho.

En el XIV Congreso del Partido Comunista de Bulgaria, celebrado del 30 de enero al 2 de febrero, comenzó a debatirse el futuro de la organización y su posible refundación conforme a las ideas del socialismo democrático. En función de todo ello, Mladenov dejaba el cargo de Secretario General y continuaba al frente de la jefatura del Estado. Alexander Lilov era elegido nuevo responsable del Partido y, posteriormente, Andrei Lukanov era nombrado Primer ministro. Al mismo tiempo, con el objetivo de seguir influyendo en la ciudadanía, los congresistas aprobaban un «Manifiesto para un socialismo democrático en Bulgaria». El 3 de abril esta organización era rebautizada con el nombre de Partido Socialista.

En las elecciones generales del 10 y 17 de junio de 1990 para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional unicameral, celebradas de forma limpia y democrática, el reconstituido Partido Socialista (PSB) lograba la victoria con el 47 por ciento de los votos y mayoría absoluta de escaños, en concreto, 211 de un total de 400; la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD) obtenía el 36 por ciento de los sufra-

gios y 144 escaños; y el Movimiento por los Derechos y Libertades y la Unión Agraria 16 y 23 escaños, respectivamente.

A pesar de los cambios que se habían producido en Bulgaria en apenas seis meses, constitucionales conforme a los principios de democracia parlamentaria y economía de mercado, el sector más radical de la oposición no dio por consumada la ruptura con el viejo orden comunista hasta no lograr la dimisión de P. Mladenov al frente del Estado. Este objetivo se consiguió con la renuncia de aquél el 6 de julio de 1990. Para tranquilizar a la opinión pública, el 1 de agosto la Asamblea Nacional, de mayoría socialista, daba su apoyo a la elección de Jeliu Jeliev, antiguo disidente comunista y hombre fuerte de la UFD, como Presidente de la República. Según el propio Jeliev, el acuerdo de la Cámara podía considerarse «una decisión histórica para llegar a la democracia».

Ante el cúmulo de problemas de todo tipo sin resolver, y especialmente los de índole económica (tiendas vacías, racionamiento de los productos de primera necesidad incluidos los agrícolas, desabastecimiento energético, productividad nula, cierres de empresas, deuda externa multimillonaria, etc.), el sindicato *Podkrepa* convocaba a finales de noviembre de 1990 una huelga general de cuatro días que contó con el apoyo masivo de la población. El 29 de noviembre el Primer ministro Lukanov presentaba su dimisión al Presidente de la República. Poco tiempo después, la práctica mayoría de los grupos parlamentarios daba su visto bueno, en la primavera de 1991, al 13 de octubre como fecha de los comicios legislativos y municipales, y al proyecto constitucional que hacía de Bulgaria un Estado de Derecho, aprobado el 13 de julio por la Asamblea Nacional.

En las elecciones generales de octubre de 1991, con una participación del 80 por ciento del electorado, obtenía la victoria la UFD con el 36 por ciento de los sufragios y 110 escaños; a continuación quedaba el PSB con el 33 por ciento de los votos y 106 escaños; y el Movimiento de Derechos y Libertades conseguía 24 escaños. Según el periódico *Le Monde*, la ficha búlgara del dominó había caído y llegaba el momento de que la Asamblea recién elegida afrontase con decisión la culminación de las reformas tanto tiempo «retrasadas e incluso saboteadas» por los epígonos del socialismo real. Una vez constituido el Parlamento, los diputados con excepción de los excomunistas daban su aprobación al nuevo gobierno de coalición, apoyado por la UDF y dirigido por Dimitrov.

A lo largo de la década de los noventa, los países de la Europa Central, Suroccidental y Báltica lograron consolidar sus procesos de transición, estrechando vínculos con la Unión Europea y la Alianza Atlántica. En Bulgaria, también la alternancia política ha contribuido a la consolidación del sistema democrático y parlamentario: el Partido Socialista, que había contando con el mayoritario respaldo popular en las elecciones de 1994, se vio superado en los comicios de 1997 por la Unión de Fuerzas Democráticas.

Además de los procesos de transición a la democracia y a la economía social de mercado, otro de los grandes retos que se plantearon los revolucionarios del Este y del Báltico fue lograr el «retorno de Europa» a esta parte del Viejo Continente comprometida con los valores europeístas comunitarios; previamente todos estos

países habían ingresado en el Consejo de Europa, el cual certificaba sus credenciales democráticas para poder optar a la adhesión comunitaria. Este afán fue muy bien recibido por los responsables de las Comunidades Europeas, prestos a apoyar el cambio que estaban protagonizando los países del antiguo bloque soviético. Para facilitar dicho proceso de integración europea —ya en mayo de 1990 Bulgaria había sido incluida en el Programa PHARE—, las Comunidades establecieron los acuerdos especiales de asociación o «acuerdos europeos»: en noviembre de 1992 Bulgaria firmaba dichos acuerdos de asociación, en vigor desde febrero del año siguiente. Poco tiempo después, sin olvidar que las condiciones para la adhesión exigían el funcionamiento correcto de la economía de mercado, así como la estabilidad institucional en el marco de la democracia parlamentaria, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías, en el Consejo Europeo de Copenhague del 22 de junio de 1993 la Unión Europea afirmaba de nuevo su firme voluntad de ampliación al Este, compromiso que reiteraba en el Consejo Europeo de Essen de 10 de diciembre de 1994. En este sentido, y siguiendo la estela de Hungría y Polonia que en la primavera de 1994 habían presentado sus candidaturas de adhesión a la Unión Europea, Bulgaria lo hizo el 14 de diciembre de 1995 (Rumania lo había hecho el 22 de junio).

El Consejo Europeo de Luxemburgo, del 12 y 13 de diciembre de 1997, autorizó la puesta en marcha del proceso de ampliación a los países de la Europa Central, Suroriental y Báltica Este. Las negociaciones comenzaron el 31 de marzo de 1998, y entre los países seleccionados para la primera etapa no estaba Bulgaria —ni tampoco Rumania— (y sí lo estaban Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia y Estonia, a los que se sumó Chipre); la Comisión alegaba fundamentalmente razones de índole económica para postergar las conversaciones con Bulgaria (y también con Rumania, Letonia y Lituania; y razones de índole democratizador para el caso de Eslovaquia). Posteriormente, el Consejo Europeo de Helsinki, celebrado en diciembre de 1999, anunciaba la inclusión, a partir de enero de 2000, de Bulgaria (junto con Rumania, Eslovaquia, Letonia y Lituania —países de la denominada «segunda etapa»—, además de Malta y Turquía). El 4 de octubre de ese año, el Parlamento Europeo respaldó las negociaciones para la incorporación de los países Bálticos y de la Europa Central y Suroriental y proclamó que «la unificación de Europa en una zona de paz, seguridad, prosperidad y estabilidad tras su división a raíz de la ocupación soviética de la antigua Europa del Este sigue siendo la misión histórica de la Unión Europea y el objetivo último de sus políticas».

Finalmente, en diciembre de 2000 el Consejo Europeo de Niza decidió cuáles iban a ser las bases legales para la siguiente ampliación: reforzar el papel del presidente de la Comisión, asignar nuevos escaños en el Parlamento, variar el reparto de votos en el Consejo y reforzar el voto por mayoría. Dos años más tarde, el Consejo Europeo de Copenhague celebrado en diciembre de 2002 anunció el cierre de la primera fase de ampliación al Este con la incorporación en el año 2004 de diez nuevos países: Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, además de Malta y Chipre. Bulgaria (y también Rumania) que-

daba pendiente de la adhesión hasta un segundo momento, fijado en principio para el año 2007.

El otro gran objetivo de Bulgaria había sido la integración en la OTAN (objetivo que habían logrado en 1999: Polonia, Hungría y la República Checa): en la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Praga del 20 al 22 de noviembre de 2002 sus pretensiones de integración fueron aceptadas (junto a las de Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania), acordándose su plena integración para 2004.

2. El caso de Croacia

2.1. La crisis final del «socialismo yugoslavista»

A partir de la segunda mitad de la década de los setenta las contradicciones del titoísmo van a hacer entrar a Yugoslavia en un callejón sin salida. Desde el punto de vista de la economía, la crisis energética mundial propició el crecimiento desmesurado de la deuda externa y de la inflación, factores que incidieron muy negativamente en la evolución del sistema socialista yugoslavo, en el cual la autogestión de la economía había conllevado comportamientos autárquicos por parte de las repúblicas federadas y de hecho la ruptura de la unidad del mercado estatal. Del mismo modo, el país también estaba desarticulado socialmente y fragmentado en lo nacional. Así, una vez desaparecido el mariscal Tito, en 1980, las instituciones federales vigentes (la presidencia colegial, inoperante en momentos claves) no sirvieron para mantener unido el Estado yugoslavo.

En la década de los ochenta el gobierno Federal llevó a cabo varios intentos de estabilización de la economía. El plan de 1983, que estaba destinado a reducir la deuda y a equilibrar la balanza de pagos, no logró reducir la inflación (que pasó del 50% en 1983 al 80% en 1985), y supuso en la práctica una reducción real del nivel de vida de la población; y el plan de 1989 (la reforma Markovic) tampoco alcanzó los objetivos previstos, aunque terminó con la autogestión. Ante el deterioro manifiesto de la situación, Yugoslavia, desarticulada socialmente y fragmentada en lo nacional, comenzó a deslizarse por la senda de la desintegración.

La crisis terminal que venía padeciendo Yugoslavia desde la segunda mitad de la década de los ochenta tuvo un desenlace dramático, alentado por desavenencias nacionalistas ante la inoperancia y división de las más altas magistraturas del Estado: en la dirección de la LCY, en el gobierno Federal y en la propia presidencia colectiva. Para empezar, las autoridades serbias —con S. Milosevic al frente— animadas y rearmadas ideológicamente por el Memorándum de la Academia de Ciencias (elaborado en 1986) tomaron la decisión de dejar sin efecto el estatuto de autonomía de las provincias de Kosovo (en la cual en 1981 se había reactivado el enfrentamiento entre albaneses y serbios) y Voivodina, forzando para ello una reforma constitucional (1989), entendida en Eslovenia o en Croacia como el primer paso hacia la «Gran Serbia». Ante dicha iniciativa, Eslovenia —secundada posteriormente por Croacia— propuso la refundación del Estado sobre la base confede-

ral, empezando por la LCY; pero el Congreso extraordinario de esta organización (febrero de 1990), que había terminado con el monopolio político del Partido, rechazó la propuesta de los comunistas eslovenos, lo que produjo la ruptura de la LCY.

La desarticulación de la LCY produjo a lo largo de 1990 la descomposición del poder comunista en las repúblicas de la Federación, excepto en Serbia y Montenegro. Así, en Eslovenia la antigua LC fue reconvertida en el Partido de Renovación Democrática y en Croacia en el Partido del Cambio Democrático; al mismo tiempo, surgieron organizaciones de carácter reformista y nacionalistas. Ante la evidencia del derrumbe del sistema, las nuevas formaciones políticas forzaron la celebración de elecciones pluralista en cada una de las repúblicas por separado. En Eslovenia (abril de 1990) triunfó con mayoría absoluta la coalición de centro-derecha *DEMOS*, y posteriormente el democristiano L. Peterle fue nombrado Primer ministro y el excomunista Kucan fue elegido Presidente de la República. Un mes más tarde fueron celebradas elecciones en Croacia en las cuales obtuvo la mayoría absoluta de escaños la Unión Democrática Croata de F. Tudjman —elegido Presidente de la República—, y S. Mesic era nombrado jefe del ejecutivo. En el otoño de 1990 (noviembre-diciembre) tuvieron lugar las elecciones en Bosnia-Herzegovina en las cuales el triunfo correspondió a las fuerzas no comunista de cada comunidad (el musulmán partido de Acción Democrática, la Unión Democrática Croata y el Partido Democrático Serbio) que procedieron al reparto de responsabilidades: el musulmán A. Izetbegovic era elegido Presidente de la República, para el cargo de Primer ministro del gobierno de coalición tripartito fue designado el croata J. Pilivan, mientras que el serbio M. Krajishnih era nombrado presidente de la Asamblea. En Macedonia, después de las elecciones de noviembre que no dieron la mayoría absoluta a ninguna fuerza política, fue constituido un gobierno de coalición y el antiguo comunista K. Gligorov era elegido Presidente de la República. Finalmente, en las elecciones celebradas en Serbia a finales de 1990, la victoria por mayoría absoluta fue para el Partido Socialista (la antigua LC) de Milosevic; y el mismo resultado obtuvo el Partido Democrático de los Socialistas en Montenegro.

Con la celebración de las elecciones parlamentarias, las instituciones Federales dejaron de tener sentido y perdieron toda legitimidad (en abril de 1991 fue rechazada la propuesta de eslovenos y croatas de crear una Confederación). De este modo, el vacío de poder existente y las pretensiones expansionistas de Serbia alentó la secesión de las antiguas repúblicas yugoslavas: Eslovenia y Croacia se declararon independientes en junio de 1991, Macedonia en septiembre del mismo año y por último Bosnia-Herzegovina en marzo de 1992; ante esta situación, las Repúblicas de Serbia y Montenegro constituían en abril de 1992 una nueva unidad nacional denominada Federación Yugoslava.

2.2. La segunda fase de la guerra en los Balcanes: Croacia

El inicio formal de la desintegración de Yugoslavia movilizó al Ejército Federal controlado por los serbios contra las repúblicas secesionistas, sin que el estallido de la guerra en los Balcanes evitase el final del «sueño yugoslavista» ni el

reconocimiento internacional de los nuevos Estados independientes. El conflicto bélico en la antigua Yugoslavia se desarrolló en tres fases: la segunda de estas fases, cuyo momento culminante se desarrolló entre julio de 1991 y enero de 1992, tuvo a Croacia como teatro de operaciones (la primera fase, del 27 de junio al 8 de julio de 1991, tuvo por escenario Eslovenia; y la tercera, a partir de marzo de 1992, asoló los campos y las ciudades de Bosnia-Herzegovina).

Croacia no tardó en seguir los pasos de Eslovenia y puso en marcha su propio proceso de ruptura con el Estado Federal Yugoslavo sobre la base del derecho a la soberanía nacional. Para llevarlo a la práctica, sin embargo, Croacia tuvo que hacer frente a grandes dificultades derivadas de la oposición de los serbocroatas, especialmente en Krajina, a la desintegración de Yugoslavia. Para dejar expedito el camino hacia la independencia, a finales de 1989 las autoridades croatas dieron luz verde a la instauración del pluripartidismo y acordaron la celebración inmediata de elecciones.

En los comicios del 22 de abril y 5 mayo de 1990, la Unión Democrática Croata de Franjo Tudjman (*Hrvatska Demokratska Zajednica —HDZ—*), formación política surgida de la unión de diversos grupos de la derecha nacionalista, logró la victoria y la mayoría absoluta al obtener 209 escaños de los 365 de las Cámaras de la Asamblea nacional; su más directo rival fue el Partido del Cambio (excomunista) que sólo logró 81 escaños; los 91 escaños restantes quedaron repartidos entre los demás grupos políticos. Los días 30 y 31 de mayo, la Asamblea nacional eligió Presidente de la República al exgeneral F. Tudjman, máximo líder de la *HDZ*, y nombró a S Mesic, también de la *HDZ*, para el cargo de Primer ministro.

Legitimados por las urnas, poco tiempo tardaron los dirigentes nacionalistas de la *HDZ* en proclamar su objetivo de crear un «Estado nacional del pueblo croata». Las minorías del país, incluso los serbo-croatas más moderados, consideraron discriminatorios los mensajes lanzados por las autoridades de Zagreb y los recibieron con gran recelo. El 25 de julio de 1990, la Asamblea croata proclamó el derecho a la soberanía nacional, lo que no dejaba de atentar contra la legalidad aún vigente en Yugoslavia. Pocos meses más tarde, en diciembre de 1990, se votó la nueva Constitución fundamentada en «la continuidad histórica del Estado croata», dejando de lado la trágica experiencia *ustachi*. Según la Carta Magna, la República de Croacia era un Estado «unitario e indivisible», aunque en el artículo 140 todavía se estipulaba que «la República Croata continuaba en el marco de la República Socialista Federativa de Yugoslavia hasta el momento en que se llegase a un nuevo acuerdo entre las distintas repúblicas yugoslavas o mientras que la Asamblea nacional croata no decidiera lo contrario».

Ante el cambio político que se estaba produciendo en Croacia, comunidad con una importante minoría serbia (12% del total de la población), en el verano de 1990 se constituyó en la localidad de Srb un autodenominado «Consejo Nacional Serbio», apoyado por Serbia y compuesto por representantes de trece municipios serbios en la zona de Knin, Dalmacia. El recién constituido «Consejo Nacional Serbio», en clara oposición a las autoridades de Zagreb, proclamó la autonomía de los serbios de Croacia, que fue refrendada por la población mediante un referéndum

celebrado a finales de agosto y primeros de septiembre. Meses más tarde, en diciembre, se crearon las «Regiones Autónomas Serbias» (RAS) de Krajina, región poblada mayoritariamente por serbios, y de Eslovenia Oriental, en donde los serbios eran minoría. En la primavera de 1991, la RAS de Krajina anunciaba su propósito de escindirse de Croacia para vincularse como entidad autónoma al Estado serbio, planteamiento que rechazó la Asamblea nacional de Serbia. Así, la esperanza de lograr un acuerdo que hiciera posible la convivencia entre las distintas comunidades que vivían en Croacia no tardó mucho tiempo en difuminarse: la intransigencia y el desprecio al «otro» marcaron de forma indeleble el destino de ambas comunidades.

Siguiendo el ejemplo esloveno, también en Croacia se celebró el 19 de mayo de 1991 un referéndum en el cual el 90% de los votantes apoyó el derecho a la soberanía. Ante la victoria de los postulados de la *HDZ*, Tudjman advirtió a las autoridades de Belgrado que si los serbios de Croacia seguían en su línea «contestataria y separatista», el soberano Estado de Croacia no apoyaría la recreación de Yugoslavia, ya fuera sobre nuevas bases federales o confederales. El 25 de junio de 1991, la Asamblea croata proclamó la independencia de la República. Al mismo tiempo, los serbo-croatas proclamaron su escisión de Croacia y su intención de permanecer dentro del Estado yugoslavo. En estas condiciones, el conflicto nacionalista que enfrentaba a croatas y serbios de Croacia, estos últimos apoyados por Serbia, no tardó en degenerar en guerra abierta. Para hacer frente a dicha contingencia con el mayor respaldo posible, Tudjman nombró el 1 de agosto un gobierno de «Unión Nacional».

El final de la guerra en Eslovenia no supuso la paz en la antigua Yugoslavia, sino el comienzo de las hostilidades en Croacia en julio de 1991. En esta República, y con el objetivo de activar un conflicto bélico a gran escala, los representantes de la minoría serbia organizaron milicias —*chetniks*— de autodefensa. Contaban para ello con el apoyo de unidades militares estacionadas en la República o procedentes de Eslovenia, pertenecientes todas ellas al Ejército Federal Yugoslavo, convertido ya de hecho en ejército serbio-montenegrino. A finales de 1991 la guerra había provocado decenas de miles de muertos, y un éxodo de cientos de miles de personas ante la depuración o «limpieza étnica» practicada por las milicias serbias, las cuales controlaban un tercio del territorio croata, sustancialmente Krajina y Eslavonia Occidental y Oriental; la caída en poder serbio de Vukovar, el 18 de noviembre de 1991, se convirtió en el símbolo de la debacle croata. Pero, al igual que los *chetniks* serbios, los croatas no dudaron en recurrir al procedimiento de «limpieza étnica» en los territorios reconquistados durante las últimas semanas de 1991, especialmente en la región de Eslavonia Occidental, tal como se denunció en el «Tercer Informe» Mazowiecki sobre el respeto de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia.

Ante la tragedia producida por la guerra, la comunidad internacional trató de frenar el conflicto por todos los medios a su alcance. A finales del verano de 1991 la Comunidad Europea, en función de un informe de una junta jurídica de arbitraje — la «Comisión Badinter»— sobre la conveniencia de reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia de acuerdo con la Carta de la ONU y el Acta final de Helsinki, culpaba a Serbia de la agresión bélica que sufría Croacia y la instaba a que pusiera

fin al conflicto; la recomendación fue apoyada por Estados Unidos. No fructificaron los esfuerzos desplegados en la Conferencia de Paz sobre Yugoslavia, celebrada en La Haya del 7 de septiembre al 5 de noviembre de 1991 y ante la negativa serbia a todo tipo de acuerdo, el Comisario Europeo para las relaciones con los antiguos países del Este, Hans van den Broek, dio por fracasado el intento cuando afirmó que no se podía «proseguir indefinidamente la Conferencia sobre la paz en Yugoslavia» porque ésta no era sino un mero instrumento de cobertura para continuar los combates.

Al mismo tiempo, la ONU comenzaba su actuación en la zona. El 25 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó por la Resolución 713 un embargo de armas en todo el territorio de la antigua Yugoslavia; y el 13 de diciembre, dio el visto bueno para el estacionamiento de cascos azules en la zona e instó a las partes a poner fin a las hostilidades. El 3 de enero de 1992 serbios y croatas firmaron un nuevo acuerdo de alto el fuego, que ambas partes mantuvieron, aunque a veces precariamente. Para garantizar el cumplimiento efectivo del alto el fuego, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las Resoluciones 743 y 749, de 21 de enero de 1992 y 7 de abril de 1992 respectivamente, que autorizaban el estacionamiento en Croacia de una Fuerza Multinacional de Interposición (FORPRONU) formada por catorce mil cascos azules; dicho contingente fue desplegado a partir de mayo en cuatro grandes zonas de seguridad: el «Sector E» comprendía la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srymie Occidental; el «Sector N», Krajina Septentrional; el «Sector S», Krajina meridional; y el «Sector O», Eslavonia Occidental.

2.3. Croacia: de la consolidación nacional a la transición democrática y el largo camino hacia la Unión Europea

El 15 de enero de 1992, poco tiempo después de hacerse efectivo el acuerdo de alto el fuego, Croacia había obtenido el reconocimiento de la Comunidad Europea, inducida ésta por el gesto de Alemania, que lo había hecho un mes antes; no obstante, según el informe de la «Comisión Badinter», había que supeditar dicho reconocimiento a la aprobación por la Asamblea croata de la «carta de los derechos de las minorías». Con el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con la Comunidad Europea, y su posterior ingreso en la ONU cuatro meses después, la autoridades croatas recibieron el respaldo internacional que necesitaban para proceder a consolidar su nueva y ansiada unidad estatal. De nuevo, para lograr el refrendo popular a la política desarrollada por el equipo gubernamental que dirigía el Presidente Tudjman, los croatas fueron convocados a las urnas el 2 agosto de 1992. La victoria correspondió una vez más al partido *HDZ*, que obtuvo el 43% de los votos y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados: 85 escaños de un total de 138; las restantes fuerzas políticas quedaron a gran distancia del vencedor. Así, por ejemplo, el Partido Social-Liberal sólo pudo hacerse con 14 escaños, mientras que los excomunistas obtuvieron 11 actas de diputado. En los comicios presidenciales, F. Tudjman obtuvo el respaldo popular a su gestión, y fue elegido Presidente de la República con el 57% de los votos, en esta ocasión por sufragio universal. Con las lacras de la guerra muy presentes y las regiones de Krajina y Eslavonia Oriental todavía en

poder de los serbo-croatas y sus aliados², el Presidente Tudjman y su gobierno presentaron el restablecimiento de la unidad nacional como la gran tarea pendiente del Estado croata. Junto a lo anterior, Croacia tenía que afrontar el gran reto de culminar su transición política y socioeconómica para vincularse así al círculo de influencia de la Unión Europea.

Pero sólo al comenzar el siglo veintiuno el «retorno de Europa» a Croacia comenzó a hacerse realidad: en el año 2003 solicitaba oficialmente su ingreso en la Unión Europea, el 18 de junio del año siguiente lograba ser candidato a la adhesión y a partir de octubre de 2005 se daba el visto bueno a la apertura de negociaciones para su incorporación a la Unión.

3. El caso de Turquía

3.1. Algunas claves de la Turquía de Kemal Atatürk en la época actual

Turquía, nación heredera del antiguo Imperio Otomano —aunque circunscrito casi exclusivamente a la península de Anatolia— es el país que, de la mano de Mustafa Kemal Atatürk y sus seguidores durante los años de entreguerras, inició y consolidó con más éxito el proceso de modernización política, social y económica de corte occidental, aunque ha preservado la religión islámica como seña de identidad más importante. A pesar de la muerte de Kemal en 1938, en vísperas del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Turquía, dirigida por el general I. İnönü, logró mantenerse neutral prácticamente hasta el final del conflicto momento en el cual (febrero de 1945) declaró la guerra a las potencias del Eje; así, pudo vincularse más estrechamente a las potencias Aliadas, en especial a Estados Unidos.

La evolución de Turquía durante la segunda mitad del siglo veinte no ha dejado de ser problemática. En política interna, las épocas de poder personal o de dictaduras civiles encubiertas, caso de Menderes en los años cincuenta, así como golpes de Estado protagonizados por las Fuerzas Armadas —en 1960 ó en 1980, con las consiguientes reformas del ordenamiento constitucional—, han mediatizado el funcionamiento de la democracia parlamentaria; en los últimos años, sin embargo, la principal preocupación de las autoridades turcas no es otra que evitar el avance del fundamentalismo islámico en el país.

En otro orden de cosas, la «cuestión del Kurdistán»³, que también afecta a otros países de la zona, ha seguido siendo conflictiva, lo que ha obligado al gobierno de Ankara a vivir en una permanente vigilia armada obligado especialmente

²La región de Krajina fue recuperada por Croacia en agosto de 1995. En el acuerdo de paz de Dayton (ratificado en París por todas las partes implicadas el 14 de diciembre de 1995) se estipuló la reintegración de Eslavonia Oriental a Croacia por cauces pacíficos en el plazo no superior a dos años.

³El problema del Kurdistán está enraizado en la desaparición del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. En el tratado de Lausana de 1923 no se estipuló ninguna cláusula respecto a una posible autonomía ni tampoco creó la Sociedad de Naciones un Mandato sobre Kurdistán. En la actualidad su territorio —500.000 Km².— y población —25 millones, en su mayoría musulmanes suníes— se encuentran divididos entre Turquía (el 50% de ambos), Irak e Irán (casi el otro 50%) y, en mucho menor grado, Siria y algunos países del Cáucaso.

por las acciones emprendidas en 1985 por el Partido de los Trabajadores Kurdos, marxista-leninista (*PKK*), a través de la guerrilla armada o bien por el Frente de Liberación Nacional del Kurdistan (*ERNK*), brazo político del anterior. A partir de este momento, la lucha armada del *PKK* fue contestada sin descanso por el ejército turco, tarea en la cual contó con la colaboración puntual de terceros países de la zona, en especial del gobierno iraquí, a la hora de hostigar a las partidas guerrilleras en la zona fronteriza común. Esta situación de guerra sin cuartel contra la guerrilla en el Kurdistan turco conoció nuevos episodios en los primeros años de la década siguiente. Así, desde 10 de mayo de 1990, el gobierno de Ankara reforzó el control militar de la región con leyes más severas y poderes especiales a los gobernadores de las provincias del sureste (de población mayoritariamente kurda) en la lucha contra la guerrilla separatista de los comunistas kurdos, la cual alcanzó su momento más virulento a mediados de los años noventa.

Como contrapunto a la actuación bélica contra la guerrilla comunista kurda, a comienzos de la década de los noventa las autoridades turcas aflojaron el control sociocultural impuesto desde la época kemalista a la minoría kurda con el reconocimiento oficial de su existencia (unos doce millones de kurdos vivían en Turquía, aproximadamente el 20% de la población total del país), asunto al que se refirió el propio Presidente Turgut Ozal, y despenalizando el uso público de su propia lengua. Pero Ankara siguió rechazando otras reivindicaciones de carácter étnico o político como el reconocimiento de un estatuto especial de autonomía para el Kurdistan turco.

Al mismo tiempo, la evolución de la situación de Chipre, especialmente desde la crisis de los años cincuenta entre las comunidades griego-chipriota y turco-chipriota (que llevó a la independencia de la isla en agosto de 1960), y, sobre todo, de los años sesenta, con enfrentamientos armados entre ambas comunidades (teniendo que actuar la ONU en 1963), ha preocupado permanentemente a la diplomacia turca. Ante los sucesos ocurridos con motivo de un golpe de Estado en Chipre, inspirado en julio de 1974 por el régimen de Atenas, el Ejército turco se vio en la necesidad de intervenir ocupando el noroeste de la isla, forzando de hecho la partición de la misma con la creación en dicho sector de un «Estado Autónomo Federado Turcochipriota» (febrero de 1975), situación que fue consolidándose a medida que avanzaba el proceso de «turquificación» de la zona norte; los acontecimientos de Chipre enfrentaron diplomáticamente al gobierno de Turquía con la ONU al no facilitarse las negociaciones que hicieran posible el establecimiento en la isla de un «estado federal bizonal», e incluso con Estados Unidos (la crisis de las bases), resolviéndose este último ante la escalada del fundamentalismo en Irán. Así las cosas, en 1983 era autoproclamada la «República Turca de Chipre del Norte», sin que haya sido posible hasta el momento resolver el contencioso de manera favorable para ambas partes conforme a las directrices de la ONU.

3.2. Por la «senda europea» marcada por Atatürk

Fieles a las palabras de Mustafa Kemal Atatürk: «Occidente siempre ha visto con prejuicios a los turcos, pero nosotros los turcos siempre hemos avanzado siste-

máticamente hacia Occidente», desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestro días las autoridades de Ankara continuaron mirando más a Europa que a Asia, y teniendo en cuenta su situación estratégica (auténtica encrucijada entre Oriente y Occidente), en 1952 formalizaron su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

A partir de este momento comenzaron sus contactos con las Comunidades Europeas con el objetivo de lograr su incorporación a la Europa comunitaria como Estado miembro de pleno derecho, tarea en la que lleva ocupada Turquía desde hace más de cuarenta y cinco años. Integrada en el Consejo de Europa desde su fundación, con la credenciales que otorgaba dicho vínculo en 1959 el Primer Ministro turcos, Adnan Menderes, presentaba la candidatura de país asociado a las Comunidades. El 12 de septiembre de 1963, por el denominado «Acuerdo de Ankara», Turquía y las autoridades comunitarias firmaban el Tratado de Asociación, al que se le añade un Protocolo Adicional en 1970. Casi veinte años más tarde, en 1987, Turquía presentaba su candidatura oficial a la adhesión plena en las Comunidades Europeas.

En estos mismo años, coincidiendo con la entra de Portugal y España en las Comunidades Europeas, la trascendencia de la frontera sur de Europa se puso de manifiesto plenamente. De hecho, fue iniciativa española el que la «cuestión mediterránea» comenzara a tratarse con mayor profundidad en foros y reuniones de organismos comunitarios. Las relaciones de la Unión Europea con los países del sur y el este del Mediterráneo están fundamentadas en una política de proximidad que refleja la importancia socioeconómica, política y estratégica que entraña la región para la Europa unida. Por ello la «Asociación Euromediterránea», denominación oficial del Proceso de Barcelona puesto en marcha el 27 de noviembre de 1995 — durante la presidencia española de la UE—, aspiraba a fortalecer sus vínculos con la región mediante políticas superadoras tanto de los tradicionales programas de ayuda al desarrollo como de la simple cooperación comercial. En esos momentos, los candidatos en aquel momento a la adhesión, Chipre, Malta y Turquía valoraron el Proceso de Barcelona iniciado no sólo por su importancia intrínseca sino como instrumento para fortalecer su posición en las negociaciones sobre su incorporación a la Unión Europea.

El periodo de tiempo iniciado tras la Conferencia de Barcelona coincidió con avances importantes en las negociaciones de Turquía con la Unión. En 1996 entró en vigor una unión aduanera para productos industriales y agrícolas transformados, y en diciembre de 1999 el Consejo Europeo de Helsinki prometió a Turquía el estatus de «país candidato» en cuanto cumpliera los criterios políticos de Copenhague. Años después, el Informe de Progreso emitido por la Comisión Europea el 6 de octubre de 2004 señalaba que «Turquía cumplía suficientemente los criterios políticos», motivo por el cual el Consejo Europeo de Bruselas de 17 de diciembre de ese mismo año dio el visto bueno a la apertura de negociaciones para la adhesión, que comenzaban, no sin recelos por parte de algunos estados miembros, el 3 de octubre de 2005.